

Meg Taylor
Vice Presidenta
Banco Mundial
2121 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433, USA
T: + 1 202 458 1973
F: + 1 202 522 7400
E-mail: cao-compliance@ifc.org

Tocoa, Colon, Honduras el 24 de Junio del 2014

Estimada Sra. Taylor:

Escribimos con el motivo de presentar una denuncia ante su persona como representante de Compliance Advisor Ombudsman (CAO) de la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial en contra las empresas de Aceite de Palma Africana **CORPORACIÓN DINANT** y su gerente general Miguel Facusse Bajum de origen Árabe.

Nuestra organización, el Movimiento Unificado Campesino del Aguàn (MUCA), consiste en 16 Empresas Asociativas Campesina de Producción cuatro Fincas La Aurora, Lempira, Confianza y la Concepción. Todas las familias campesinas que habitan en la misma han sido perjudicadas por la grave violación a los derechos humanos y privados del derecho inherente a la vida d , por las operaciones de corporación Dinant. Sabemos que esta corporación terrateniente ha sido financiada con préstamos millonarios otorgados por la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo financiero del Banco Mundial por préstamos al gerente general Miguel Facusee Bajum.

El comienzo de esta problemática estructural de marginación total para los campesinos y campesinas en el Bajo Aguàn y el acaparamiento de los territorios que generan las riquezas que favorecen a los terratenientes de origen extranjero está sustentado en el modelo socio económico Neoliberal, adoptado desde hace más de 20 años afectando a los campesinos del Bajo Aguan por medio de las políticas del Ajuste Estructural Agrícola financiado por el Banco Mundial en la década 1990. Estas políticas dieron lugar a un despojo ilegal y masiva de las tierras de la reforma agraria así como las agencias del estado que promovieron la reforma agraria, proceso impulsado por terratenientes y empresarios particulares a través de violencia y la corrupción de los tres poderes del Estado quienes están al servicio total de las corporaciones terratenientes.

A inicios de los años 90 el Estado bloqueo el apoyo técnico y financiero al campesinado de todo el país, donde los políticos vernáculos de los Organismos Internacionales como el Fondo Monetario Internacional (**FMI**), el Banco Mundial (**BM**) entre otros, contribuyeron para la creación y aprobación de la nefasta Ley de Modernización para el desarrollo del sector

agrícola en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, Ley que convirtió el campesinado en jornaleros con salarios mal pagados y trabajándole a los terratenientes.

En medio de este contexto el 9 de diciembre del 2009 los y las campesinas del MUCA iniciaron los procesos de recuperación de 26 fincas de palma africana, en ese momento se desato una fuerte persecución y cacería humana a líderes campesinos en la región del aguan.

Los movimientos y organizaciones campesinas del Bajo Aguan, mostramos nuestra preocupación por los constantes desalojos violentos e ilegales, el desplazamiento forzoso y las graves violaciones a los derechos humanos, así como también más de un centenar de asesinatos, alrededor de mil campesinos y campesinas con juicios incoados por usurpación de tierra en los tribunales de justicia, la destrucción al medio ambiente y la contaminación de las aguas de lagunas y ríos.

En todo lo antes expuesto se han visto involucrados los señores Miguel Facusse presidente ejecutivo de Corporación Dinant, Rene Morales Carazo presidente ejecutivo de Oleopalma, a través de sus empresas de seguridad y la manipulación de la débil justicia hondureña y el soborno de las autoridades policiales y militares.

Pedimos al CAO, de apertura a una investigación independiente sobre los causantes del origen del conflicto de tenencia de tierra aguan, las graves violaciones a los derechos humanos, la destrucción y contaminación del medio ambiente, provocadas por las corporaciones terratenientes antes mencionadas que están recibiendo financiamiento del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional la que se encarga de la inversión privada, contradiciendo los principio para el cual fue creado el BM en 1948, combatir la pobreza, sin embargo en nuestra región solo ha contribuido al desplazamiento de las comunidades, la persecución y los asesinato de líderes campesinos y campesinas profundizando aún más la crisis agraria y alimentaria que enfrentamos los campesinos en el campo.

Esperamos que la CAO como defensor del pueblo, escuche nuestras preocupaciones y en su trabajo histórico en la defensa de los derechos de las comunidades campesinas de apertura cuanto antes a estas investigaciones para que el Banco Mundial no continúe financiando corporaciones que violentan los derechos humanos y que desplazan y empobrecen las comunidades.

Todo este escenario de extremada conflictividad no pudiera acentuarse tan injusta e inhumanamente sobre el Valle del Aguan si no existieran las mínimas posibilidades de apoyo financiero del Banco Mundial que desde hace años alimentan las líneas de crédito de las empresas de los terratenientes mencionados, motivo por el cual solicitamos publica y abiertamente nos escuchen y que nos reciban en sus oficinas donde permanecen, para entregarles toda la documentación que explique detalladamente los terribles daños ambientales y sociales que ha provocado la CORPORACIÓN DINANT misma de la cual es gerente general Miguel Facusee Bajum, para evitar que sigan proporcionando créditos millonarios que conllevan a acrecentar la pobreza, las violaciones a los DDHH y las pérdidas de vidas campesinas que desde hace años bañan de impunidad al Valle de Aguan.

Estos documentos probaran la profunda impunidad que impera en el sistema de justicia que deja en la total indefensión al campesinado nacional, las violaciones al orden jurídico y constitucional al favorecer a los empresarios que violentan y pervierten la ley, no cumplen los acuerdos y se adueñan, ilegal y violentamente de las tierras del Aguan, las violaciones a los DDHH; desde muertes violentas y demás violaciones a los derechos civiles, económicos y políticos generadas por el conflicto agrario lo cual somete al campesinado a una guerra psicológica donde el estado destina millones para mantener operaciones militares y policiales dejando a la población campesina en condiciones vulnerables y de marginamiento.

Esperamos que esta carta por si misma se convierta en un instrumento de denuncia porque en ella buscamos ser atendidos como merecemos los hondureños y hondureñas de las familias campesinas que les entregaremos una verdad poco contada y bastante callada por el sistema en el cual hoy vivimos y que nos lo han impuesto a la fuerza.

Atentamente.

Raúl Ramírez

Raúl Ramírez

Secretario general del MUCA

Ayme Ajaí Cabreza

Plataforma Agraria Regional del Aguan

